

REVISTA DE DERECHO

PUBLICADA TRIMESTRALMENTE POR EL SEMINARIO DE DERECHO PRIVADO
DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

DIRECTOR: DAVID STITCHKIN B.

DIRECCION Y ADMINISTRACION: ESC. DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

AÑO XII - CONCEPCION (CHILE), OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1944 - N.º 50

INDICE

HUGO TAPIA ARQUEROS	LAS REFORMAS INTRODUCIDAS EN EL LIBRO I DEL C. DE P. CIVIL POR LA LEY 7760	PAG. 295
MANUEL LOPEZ REY-ARROJO	PROYECTO OFICIAL DE CODIGO PENAL PARA LA REPUBLICA DE BOLIVIA	" 323
	PREMIOS "ESTEBAN S. ITURRA" Y "TO- MAS MORA	341
	JURISPRUDENCIA	
	RECURSO DE QUEJA EN JUICIO DEL TRABAJO	" 347
	PARRICIDIO	" 351
	PRESCRIPCION	" 363
	COBRO DE INDEMNIZACIONES POR EN- FERMEDAD PROFESIONAL	" 367
	CONTRATO DE TRABAJO	" 379

CORTE DEL TRABAJO DE CONCEPCION

ELOY GARAY Y OTROS
CON GABINO VARELA Y OTROS
COBRO DE INDEMNIZACIONES POR
ENFERMEDAD PROFESIONAL

ANTRACOSIS—INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL—ENFERMEDAD PROFESIO-
NAL—RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO DE UNA MINA—SEGURO DE
ACCIDENTES Y ENFERMEDAD—EXENCION DE RESPONSABILIDAD

DOCTRINA.— *La circunstancia de que los demandantes hayan seguido trabajando con posterioridad a la fecha en que se les diagnosticó la existencia de la afección pulmonar denominada "antracosis", que técnicamente produce la incapacidad total y permanente para el trabajo, no quiere decir que no exista en el hecho tal incapacidad y si los obreros demandantes continuaron trabajando, ello se ha debido, seguramente, a la premiosa necesidad en que han debido encontrarse para poder sobrellevar la subsistencia de ellos mismos y de la numerosa familia que vive a sus expensas, siendo humano que un individuo sobre el cual pese tal responsabilidad, no obstante sentir disminuidas sus energías físicas y capacidad de trabajo, continúe laborando, si no se le proporcionan los medios económicos más indispensables para proveer a la satisfacción de sus más imprescindibles necesidades, pues sostener lo contrario importaría, sencillamente negar en forma absoluta las prescripciones de la ciencia médica, en las cuales se basan las disposiciones legales que establecen la incapacidad total*

y permanente que ocasionan a los obreros las enfermedades profesionales y se llegaría al absurdo de aceptar esa incapacidad sólo en el estado agónico de la víctima, haciendo ilusorio el cobro de la indemnización a que tiene derecho, consistente en una renta vitalicia igual al sesenta por ciento del salario anual que aquélla percibía y que deberá pagarse por mensualidades vencidas, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 265 del Código del Trabajo.

Los propietarios de la mina en que trabajan los demandantes ninguna responsabilidad tienen, si los demandantes habían celebrado los contratos de trabajo con el arrendatario de la mina. Tampoco es responsable el patrón o empleador si éste tenía asegurados a sus obreros. En tales condiciones, corresponde a la Compañía aseguradora el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho los demandantes, en atención a que el contrato de seguro celebrado entre la Compañía aseguradora y el patrón, estaba vigente a la fecha de producirse o de hacer su aparición la enfermedad profesional que incapacitó total y permanentemente a los demandantes para el trabajo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Con lo relacionado y considerando, en cuanto a la incidencia previa formulada por la parte de don Gabino Varela en el comparendo de fs. 119, a la cual adhirieron los demás demandados, o sea, la Cia. de Seguros "El Sol de Chile"; la Sociedad Menéndez Behety y la Sección Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional de Ahorros;

1.º) Que dicha incidencia debe desecharse, por cuanto, para instar por la corrección del procedimiento que ordenó la Excmá. Corte Suprema por la resolución de fecha 25 de Julio de 1941, compulsada a fs. 99, y llamar al juicio a los primitivos aseguradores de los obreros accidentados, era, desde todo punto de vista, necesario encuadrar dicho llamado dentro de los preceptos legales contenidos en el párrafo B, del Título II del Libro IV del Código del Trabajo, o sea, citando a un comparendo al primitivo asegurador, que lo es la Caja Nacional de Ahorros por intermedio de su "Sección de Accidentes del Trabajo" y a los patrones y a la otra Compañía de Seguros que aparecían

como afectados, a objeto de que discutieran a quién incumbía el pago de las pensiones a que podrían ser acreedores los recurrentes, por la enfermedad que habrían contraído en el trabajo y que les habría producido invalidez;

2.º) Que el objeto perseguido por los demandantes Eloy Garay, Juan Hernández y Juan Herrera al presentar la solicitud de fs. 101, no ha sido otro que el de instar por la prosecución del procedimiento a fin de obtener el cumplimiento de lo resuelto por la Excmá. Corte Suprema, y, en tales condiciones, dicha presentación debe tenerse como una simple ratificación de las primitivas demandas instauradas por los recurrentes y como una ampliación de ellas en cuanto a la Compañía aseguradora que mantiene la Caja Nacional de Ahorros por intermedio de su "Sección de Accidentes del Trabajo", a la cual, por otra parte, debía proporcionarse también la oportunidad legal de hacer valer sus derechos y oponer las excepciones que estimara corresponderle;

3.º) Que, en tal situación, el nuevo comparendo a que se citó a todos los interesados no importa la tramitación de un nuevo juicio, toda vez que, si

bien es cierto que en dicho comparendo ordenó el Juzgado contestar nuevamente la demanda, no es menos cierto que ello se hizo con el solo objeto de enmendar el procedimiento y poder oír en igualdad de condiciones a la Caja Nacional de Ahorros, que también aparecía afectada por los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que son materia del juicio; y

4.º) Que consecuente con lo expuesto en los fundamentos que anteceden, debe desestimarse la incidencia previa formulada por los demandados en el comparendo de fs. 119; considerando en cuanto al fondo de la causa:

5.º) Que habiéndose desistido de la demanda uno de los demandantes, don Juan Hernández, según consta a fs. 152, la presente sentencia debe circunscribirse a la acción deducida por los actores don Eloy Garay Jontera y don Juan Herrera Quiero;

6.º) Que los demandantes señores Garay y Herrera, invocando el mérito de las denuncias corrientes a fs. 1 y 23, en las cuales aparecen los respectivos informes médicos suscritos por el doctor Pablo Voullieme Bohr, Jefe del Departamento de Higiene y Seguridad

Industrial de Magallanes, deducen demanda en contra de don Gabino Varela, y en subsidio en contra de la Compañía de Seguros "El Sol de Chile"; de la firma Menéndez Behety y de la Sección Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional de Ahorros, a fin de que la persona que resulte responsable les pague una pensión vitalicia, equivalente al sesenta por ciento del salario anual, o sea, la suma de doscientos cincuenta pesos mensuales o la suma que el Tribunal regule, por haber adquirido durante el trabajo, en la mina de carbón Loreto, la enfermedad profesional denominada "Antracosis", la cual les ha producido una incapacidad total y permanente para el trabajo;

7.º) Que se encuentra comprobado en autos, con los informes médicos corrientes a fs. 1 vta., 23 vta. y 142, que los demandantes señores Garay y Herrera padecen de la afección pulmonar denominada "antracosis", que es una enfermedad profesional que se produce por la inhalación del polvo del carbón en las faenas extractivas de este mineral;

8.º) Que con los informes médicos mencionados en el fundamento anterior, resulta fehacientemente justificado en au-

tos que la existencia de esta enfermedad, o sea, su aparición en el organismo de los demandantes señores Garay y Herrera, se constató en ambos con fecha 5 y 19 de Agosto del año 1939, respectivamente, y que uno y otro se encuentran total y permanentemente incapacitados para el trabajo, como consecuencia directa de la afección pulmonar de antracosis que sufren;

9.º) Que la circunstancia de que los demandantes Garay y Herrera hayan seguido trabajando con posterioridad a la fecha en que se les diagnosticó la existencia de esta enfermedad, que técnicamente produce la incapacidad total y permanente para el trabajo, no quiere decir que no exista en el hecho tal incapacidad y si los obreros demandantes continuaron trabajando ello se ha debido, seguramente, a la premiosa necesidad en que han debido encontrarse para poder sobrellevar la subsistencia de ellos mismos y de la numerosa familia que vive a sus expensas, toda vez que, según aparece de las denuncias de fs. 1 y 23, Herrera tiene siete hijos y Garay cinco, siendo humano que un individuo sobre el cual pesa tal responsabilidad, no obstante sentir disminuidas

sus energías físicas y capacidad de trabajo, continúe laborando si no se le proporcionan los medios económicos más indispensables para proveer a la satisfacción de sus más imprescindibles necesidades, pues, sostener lo contrario, importaría sencillamente negar en forma absoluta las prescripciones de la ciencia médica, en las cuales se basan las disposiciones legales que establecen la incapacidad total y permanente que ocasionan a los obreros las enfermedades profesionales, y se llegaría al absurdo de aceptar esa incapacidad sólo en el estado agónico de la víctima, haciendo ilusorio el cobro de la indemnización a que tiene derecho, consistente en una renta vitalicia igual al sesenta por ciento del salario anual que aquella percibía y que deberá pagarse por mensualidades vencidas, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 265 del Código del Trabajo;

10.º) Que es un hecho no discutido en el pleito y comprobado con las denuncias de fs. 1 y 23 y con las declaraciones de los testigos José Aguila y Bernardino Paredes, corrientes a fs. 139, que los demandantes Eloy Garay y Juan Herrera trabajaban como obreros en la mina de carbón Lo-

reto, en el mes de Agosto del año 1939, al constatarse la aparición de la enfermedad profesional denominada antracosis que motivó las denuncias precedentemente indicadas;

11.º) Que si bien es cierto que la mina Loreto es de propiedad de la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Menéndez Behety, no es menos cierto que aparece justificado en autos, con el documento de fs. 56, que dicha mina o más bien dicho el establecimiento industrial denominado "Mina Loreto" lo explota en calidad de arrendatario, desde el primero de enero de 1938, don Gabino Varela Martínez, quien al absolver posiciones a fs. 30 reconoce que los demandantes Garay y Herrera trabajaban como obreros a su servicio en dicha mina de carbón y percibían un salario mínimo de veinticuatro pesos ochenta centavos al día;

12.º) Que habiéndose notificado las demandas de indemnización, a que se refiere este juicio, a la Sociedad Menéndez Behety con fecha tres de Abril de 1940 y atendida la circunstancia mencionada en el fundamento anterior, debe necesariamente concluirse que esta Sociedad no ha tenido ninguna vinculación con el trabajo

de los obreros demandantes al producirse la enfermedad profesional de que se trata y en consecuencia no le afecta responsabilidad alguna, tanto más cuanto que, los derechos y acciones que habrían podido ejercitarse en su contra, en el supuesto de que los demandantes hubieran contraído la antracosis con anterioridad al 1.º de Enero de 1938, estarían prescritos por haber transcurrido el término fijado por la ley para ejercitarlos;

13.º) Que por su parte el demandado señor Varela se encuentra exento de toda responsabilidad en el pago de las indemnizaciones que se demandan, por aparecer acreditado en autos, con los documentos corrientes a fs. 59 y 61, que tenía asegurados a sus obreros, entre los cuales se hallaban los demandantes Garay y Herrera, en la Sección Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional de Ahorros desde el 20 de Enero de 1938 al 20 de Enero de 1939, y en la Compañía de Seguros "El Sol de Chile" desde el 20 de Enero de 1939 hasta el 20 de Enero de 1940;

14.º) Que atendida la característica de la enfermedad profesional contraída por los demandantes, producida por la

naturaleza del trabajo que realizaban en la extracción de carbón y de conformidad con lo prevenido en el artículo 2.º del Decreto Reglamentario N.º 581 de 21 de Abril de 1927, dicha enfermedad, denominada científicamente "Antracosis", debe ser declarada como producida durante el año precedente a su aparición, o sea, durante el tiempo comprendido, entre el mes de Agosto del año 1938 y el mismo mes del año 1939;

15.º) Que consecuente con lo expuesto en el fundamento anterior correspondería el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho los demandantes a las Compañías de Seguros mencionadas en el fundamento 13.º, o sea, a la Sección de Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional de Ahorros y a la Compañía Chilena de Seguros "Sol de Chile";

16.º) Que la Caja Nacional de Ahorros fué llamada al juicio y notificada de la demanda de Eloy Garay y Juan Herrera con fecha 23 de Febrero del año 1942, y en el comparendo de contestación corriente a fs. 119 y siguientes, por intermedio de su representante don Ramiro Rocuant, opuso a la demanda la excepción de prescripción, la cual debe acogerse de acuerdo con

lo prevenido en el artículo 303 del Código del Trabajo y desecharse, en consecuencia, a su respecto, la demanda de Eloy Garay y Juan Herrera;

17.º) Que en tales condiciones corresponde a la Compañía Chilena de Seguros "Sol de Chile" el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho los demandantes, en atención a que el contrato de seguro celebrado entre ésta y don Gabino Varela Martínez estaba vigente a la fecha de producirse o de hacer su aparición la enfermedad profesional, que incapacitó total y permanentemente a los demandantes para el trabajo, y cubría los riesgos a que estaban expuestos los obreros por accidentes del trabajo o por las enfermedades profesionales que se producirán en la mina Loreto desde el 20 de Enero de 1939 hasta el 20 del mismo mes del año 1940, y como, según se ha dejado establecido en los fundamentos que anteceden, la enfermedad hizo su aparición en Agosto del año 1939, por cuyo motivo debe considerarse producida durante el año anterior a esta fecha, es a dicha compañía a quien corresponde el pago de las indemnizaciones;

18.º) Que las alegaciones de la Compañía de Seguros "Sol

de Chile" que invoca en su defensa, o sea, que la enfermedad de que se trata existía en los demandantes con anterioridad al 20 de Enero de 1939, fecha en que ella aseguró los riesgos futuros, debe desestimarse, tanto porque tal circunstancia no aparece fehacientemente comprobada en autos, cuanto porque no es dable ni siquiera presumir que una Compañía de Seguros contrate tales riesgos sin percatarse previamente de las condiciones de salud de los asegurados, cualquiera que sea la naturaleza o forma del seguro contratado;

19.º) Que por las razones consignadas en el fundamento 9.º de esta sentencia, debe igualmente desestimarse la alegación que formula dicha Compañía a fs. 131 vta., al sostener que los demandantes no estaban incapacitados total y permanentemente para todo género de trabajo en el mes de Agosto del año 1939, por el hecho de haber continuado trabajando en la mina Loreto con posterioridad a esa fecha;

20.º) Que apareciendo justificado en autos que los demandantes quedaron total y permanentemente incapacitados para todo género de trabajo en el mes de Agosto del año 1939, al contraer la enfermedad pro-

fesional denominada antracosis, enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio del trabajo realizado por los obreros Garay y Herrera en la mina Loreto, durante la vigencia del Seguro otorgado por la Compañía "Sol de Chile", debe acogerse la demanda y condenarse a esta última al pago de las indemnizaciones correspondientes;

21.º) Que si bien es cierto que los obreros Garay y Herrera percibían un salario superior a 24 pesos diarios, mientras trabajaban al servicio de su patrón Gabino Varela, no es menos cierto que de acuerdo con lo prevenido en el artículo 265 del Código del Trabajo debe calcularse el monto de la indemnización, a título de renta vitalicia, sobre un salario anual no superior a tres mil seiscientos pesos, y como la indemnización asciende a un 60 por ciento de dicho salario anual, la renta o indemnización que corresponde a cada uno de los demandantes alcanza a la suma de 180 pesos mensuales, suma que el Tribunal estima equitativo fijar como indemnización. Por estos fundamentos y de acuerdo, además, con lo prevenido en los arts. 254, 258, 283, 284, 285, 294, 295, 455, 457 y 468

del Código del Trabajo, se declara:

1.º) Que se desecha la incidencia previa formulada por los demandados y se acoge la excepción de prescripción opuesta por la Caja Nacional de Ahorros; y

2.º) Que ha lugar a la demanda sólo en cuanto la Compañía Chilena de Seguros "Sol de Chile", representada en esta ciudad por don Héctor Wilson, comerciante, de este domicilio, deberá pagar, dentro de tercer día, la suma de 180 pesos mensuales, a título de renta vitalicia, a cada uno de los demandantes don Eloy Garay y don Juan Herrera, a contar desde el día 30 de Marzo de 1940, fecha de la notificación de la demanda, y las costas de la causa, sin perjuicio de que se tengan por abonadas las cantidades de dinero que hubieren percibido los demandantes por el capítulo de pensiones provisorias.

Anótese y reemplácese el papel.— I. Bórquez M.

Dictada por don Israel Bórquez Montero, Juez de Letras de Magallanes, subrogando legalmente al señor Juez del Trabajo por implicancia de éste.— Julio Cordero C., secretario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Concepción, 16 de Mayo de 1944.

Vistos: Eliminando de la sentencia apelada el considerando décimoquinto y la parte final del considerando duodécimo desde donde dice: "tanto más cuanto que, los derechos y acciones que habrían podido ejercitarse en su contra...", reproduciendo en lo demás dicha sentencia y teniendo, además, presente:

1.º) Que sólo apeló de la sentencia de fs. 154, don Douglas Hardy, en representación de la Compañía Chilena de Seguros "Sol de Chile", el cual en su escrito de apelación de fs. 168 formula como petición concreta sobre la cual debe pronunciarse este Tribunal, la siguiente: que se revoque la sentencia de primera instancia y se absuelva en el juicio a su representada, la Compañía "Sol de Chile";

2.º) Que, en consecuencia, la sentencia de primera instancia debe considerarse firme en cuanto desechó el incidente previo formulado por los demandados en el comparendo de fs. 119 y acogió la excepción de prescripción opuesta a la de-

manda por la Sección Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional de Ahorros; en cuanto no consideró las acciones deducidas por los demandantes Juan Irribarra y Antonio Cárdenas, que aparecen notificados de ella por intermedio de su apoderado, a fs. 171 vta., y en cuanto absolvió a los demandados, don Gabino Varela y la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Menéndez Behety;

3.º) Que el Código del Trabajo dispone que las indemnizaciones de las enfermedades profesionales se regularán conforme a las normas establecidas para la reparación de los accidentes del trabajo;

4.º) Que el Reglamento General sobre indemnizaciones por accidentes del trabajo estableció que se reputará responsable en el caso de enfermedad profesional al patrono en cuyo servicio el obrero se incapacite para el trabajo, a menos que se pruebe que la víctima padecía de la enfermedad antes de entrar a su servicio;

5.º) Que el Reglamento especial sobre enfermedades profesionales dispuso también que por regla general la indemnización será exigida al patrón que empleó a la víctima durante el año precedente a la aparición de la enfermedad;

6.º) Que, de acuerdo con las disposiciones anteriormente citadas, correspondería pagar las indemnizaciones a que tienen derecho los demandantes, a don Gabino Varela, que fué su último patrón y que los tuvo a su servicio desde el 10 de Enero de 1938, por no haber probado éste en el curso del juicio que aquellos padecían ya de la enfermedad de antracosis cuando ingresaron a su servicio, no siendo suficiente para establecer esta circunstancia, el informe médico de fs. 82, que no se refiere particularmente a los demandantes y en el cual sólo se hacen consideraciones de carácter general respecto al grupo de enfermedades conocidas bajo la denominación de neumoconiosis;

7.º) Que, a pesar de lo expuesto en el considerando anterior, procede declarar que el demandado, don Gabino Varela, se encuentra exento de toda responsabilidad en el pago de las indemnizaciones que se reclaman por los demandantes, porque a la fecha en que hizo su aparición la enfermedad y las víctimas fueron declaradas incapacitadas para el trabajo tenía un seguro vigente contra accidentes del trabajo que comprendía a todos los obreros ocupados en su establecimien-

to minero y que había sido contratado en la Compañía "Sol de Chile";

8.º) Que, de acuerdo con la póliza, que rola a fs. 61, por dicho seguro la compañía demandada "Sol de Chile" tomó a su cargo todas las indemnizaciones a que el patrono asegurado fuera obligado por las disposiciones contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo y Reglamentos respectivos, a causa de cualquier accidente personal que ocurriera durante la vigencia del contrato a cualquiera de sus obreros o empleados en el desempeño de su ocupación dentro del establecimiento minero, y no consta en parte alguna que se hubiera convenido excluir de la responsabilidad de la compañía aseguradora las indemnizaciones que el asegurado tuviera que pagar por causa de las enfermedades profesionales que se descubrieran en sus obreros durante la vigencia del contrato. De conformidad, también, con lo dispuesto en los artículos 265, 418, 420, 481 y 579 del Decreto con Fuerza de Ley N.º 178, de 13 de Mayo de 1931; artículos 6.º N.º y 62 del Reglamento N.º 238 de 31 de Marzo de 1925 y artículos 2.º, 4.º y 8.º del Reglamento N.º

COBRO DE INDEMNIZACIONES, ETC.

377

581 de 21 de Abril de 1927 sobre Enfermedades Profesionales, se confirma en su parte apelada la sentencia de 22 de Noviembre de 1943, escrita a fs. 154. Acordada después de desestimarse la petición formulada en esta instancia en lo principal del escrito de fs. 173, para lo cual se tuvo presente: que la parte apelante no objetó en primera instancia el informe médico de fs. 142 y que ordena por tercera vez la devolución de los autos al Juz-

gado de origen importaría una verdadera denegación de justicia para los demandantes.

Anótese y devuélvanse

A. Spottke S.— Alberto Ruiz D.— A. Acuña M.

Dictada por la Ilma. Corte del Trabajo de Concepción, constituida por su Presidente señor Agustín Spottke Solís, el ministro señor Alberto Ruiz Díez y el abogado integrante señor Clodomiro Acuña Morales.— René Martínez Anabalón, secretario.